

Informe de Amnistía Internacional

Geografía de la muerte

Jean Pierre Wyssenbach

Amnistía Internacional tiene ahora 33 años. Cuando cumplía 30, escribimos un artículo titulado «Muerte y vida por el mundo» (SIC 538, septiembre-octubre 1991, pgs. 372-375).

Ahora queremos transcribir algunos datos del Informe de 1993, que recoge las informaciones del año 1992.

Espantosas catástrofes de derechos humanos conmocionaron al mundo en 1992. En la antigua Yugoslavia y en Somalia la carnicería alcanzó proporciones aterradoras: miles de hombres, mujeres y niños fueron torturados, perdieron la vida o desaparecieron. En países como Chad, China, Iraq, Liberia, Perú y Sri Lanka, los abusos y las violaciones de derechos humanos alcanzaron niveles pavorosos. La virulencia de estos trances, así como la de otros que apenas fueron noticia, parecía incomprensible e incontrolable.

Amnistía Internacional recoge las violaciones a los derechos humanos tanto de los gobiernos, como de los grupos de oposición. El gobierno de Estados Unidos siguió aumentando el número de ejecuciones, que en 1992 fueron más del doble del año anterior. Siguieron las torturas en Turquía y en México.

Grupos armados y políticos de oposición cometen repugnantes abusos, entre ellos, torturas, mutilaciones, homicidios deliberados y arbitrarios y toma de rehenes, en países como India, Israel y los territorios ocupados, Perú y Sri Lanka.

Viajaremos contra el sol, de oeste a este.

EN AMÉRICA

En octubre, el gobierno de Guatemala y los refugiados guatemaltecos en México, llegaron a un acuerdo que garantizaba a unos 45 mil refugiados que regresaban al país, la seguridad física, el derecho a la libertad de circulación, asociación y organización, y el acceso a la propiedad de la tierra.

Un decreto emitido por el presidente Bush en mayo permitía a las autoridades estadounidenses repatriar forzosamente a Haití a todos los solici-

tantes de asilo interceptados en aguas internacionales por los guardacostas estadounidenses, sin dar a ninguno de ellos la oportunidad de solicitar asilo y sin intentar examinar si su solicitud era justificada. A fines de año, más de 25 mil haitianos habían sido repatriados a Haití en virtud de este decreto. La tensión creció tanto que ha llevado a la intervención norteamericana en Haití en 1994.

EN AFRICA

A mediados de año, el gobierno de Sierra Leona calculó que desde marzo del año anterior habían muerto más de 8 mil civiles y 125 soldados como consecuencia de la toma de pueblos y ciudades de las provincias Meridional y Oriental por una fuerza de invasión procedente de Liberia. Según el testimonio de 27 presos liberianos excarcelados de la prisión de Pademba Road, en Freetown, la capital de Sierra Leona, unos 300 conciudadanos suyos murieron en dicha prisión por tortura o negligencia en los últimos años.

Según las cifras oficiales de Nigeria el año anterior habían muerto 5.300 presos de enfermedades y falta de alimento y de atención médica.

Los investigadores que sacaron a la luz los delitos contra los derechos humanos cometidos durante los 8 años de brutal dictadura en Chad descubrieron montones de cartas y postales enviadas por miembros de Amnistía Internacional de todo el mundo. En total había más de 50 mil. En cada una de ellas se instaba a altos cargos del país a que pusieran fin a la tortura y las ejecuciones en sus cárceles. Una comisión oficial calculó que, de una población de alrededor de 5 millones de personas, 40 mil habían perdido la vida entre 1982 y 1990, los ocho años en que el presidente Habré ocupó el poder. Unos 5 mil muertos anuales, 14 diarios.

Tras las elecciones para las asambleas regionales en junio, las fuerzas de seguridad del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope detuvieron a casi 20 mil presuntos miembros

armados del Frente de Liberación Oromo. Al terminar el año habían liberado a muy pocos. Se creía que algunos de ellos eran civiles desarmados.

En Etiopía se descubrieron enterramientos secretos de víctimas de ejecución en Asmara y en otras regiones de Eritrea en las que, por lo menos durante las dos décadas anteriores, se había ejecutado extrajudicialmente a miles de eritreos sospechosos de simpatizar con la lucha armada del Frente Popular de Liberación de Eritrea en favor de la independencia de Eritrea.

Los grupos políticos que luchaban en Somalia en la guerra civil que había destruido el gobierno central y fragmentado el país desde principios del año anterior, mataron deliberadamente a millares de civiles desarmados. Al parecer, las víctimas eran elegidas debido a su pertenencia a un determinado clan. Al menos 300 mil personas, la mayoría de ellas niños, murieron de inanición por causa de la guerra, del derrumbamiento del gobierno, del hambre y de la obstrucción del flujo de ayuda humanitaria internacional. Casi un cuarto de la población —de un total de seis millones de habitantes— abandonó el país. Una gran parte de los recursos de ayuda humanitaria enviados para paliar el hambre eran robados a punta de pistola por grupos armados, algunos vinculados a grupos políticos integrados por miembros de clanes, que mataban a cualquier presunto opositor, incluidos los trabajadores de los organismos encargados de la ayuda humanitaria.

La violencia política se cobró las vidas de 700 personas en el oeste y en el centro de Kenia, en los enfrentamientos entre etnias producidos durante la primera mitad del año.

En Ruanda fueron ejecutados extrajudicialmente más de mil miembros de la etnia tutsi por parte de fuerzas gubernamentales o civiles armados que las apoyaban. Amnistía Internacional publicó un informe titulado «Persecución de la minoría tutsi y represión de los que critican al gobierno de 1990 a 1992». E hizo un llamamiento al nuevo gobierno de unidad nacional para que pusiera fin a la persecución generalizada de la etnia tutsi. No les hicieron caso. Y este año 1994 hemos presenciado horrores de la terrible venganza de la minoría tutsi.

EN ASIA

A lo largo del año el estado de emergencia estuvo en vigor en 10 provincias del sureste de Turquía, donde se recrudeció la intensidad del conflicto que des-

de hace 8 años mantienen las fuerzas de seguridad y las guerrillas separatistas del partido de los Trabajadores Kurdos. Más de 2 mil personas, entre las que había civiles, murieron.

En marzo, el gobierno del Líbano publicó estadísticas oficiales sobre víctimas de homicidios, heridos y «desaparecidos» entre 1975 y 1990. 17.415 personas figuraban en la lista:

Unos 25 mil palestinos fueron arrestados en Israel y los territorios ocupados en 1992 por motivos de seguridad, llegando a estar encarcelados a un tiempo más de 10 mil.

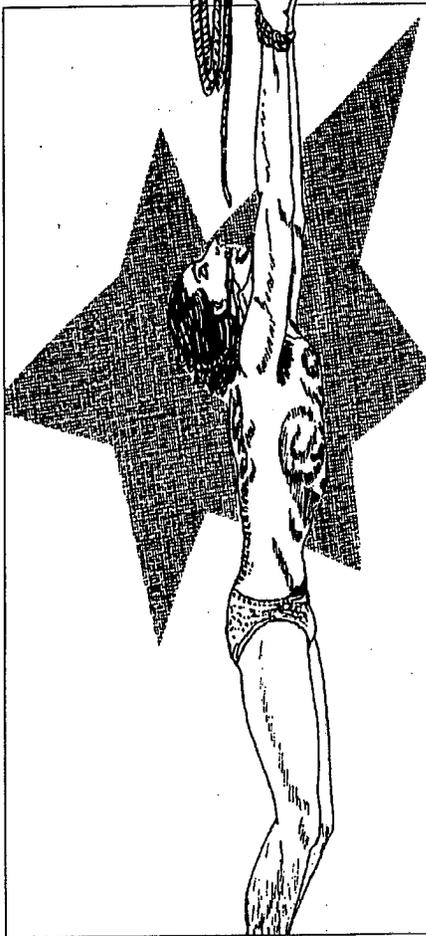
A través de documentos obtenidos en regiones bajo el control kurdo y de otras fuentes se recibió nueva información sobre algunos de los, según se calcula, 100 mil kurdos «desaparecidos» bajo la custodia del gobierno iraquí tras ser detenidos en 1988 durante las «operaciones de Anfal».

En Tayikistán continuó a lo largo del año el conflicto armado entre seguidores y opositores del presidente Nabyev. Los funcionarios estimaron que habían muerto hasta 20 mil personas y más de 420 mil habían huido de sus hogares en las zonas en conflicto.

En la India, unas 1.200 personas resultaron muertas en el estado de Uttar Pradesh por los disparos de la policía o como resultado de los violentos enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. Sólo en seis de los 415 casos de muerte bajo custodia policial de los que Amnistía Internacional tuvo conocimiento entre 1985 y marzo de 1992 se pudo saber que se había juzgado y condenado a agentes de policía en relación con la muerte de detenidos bajo custodia policial. Sólo en 14 casos de los 415 se pagaron indemnizaciones. En el estado de Punjab, los grupos armados de la oposición cometieron homicidios selectivos y sumarios de familiares de agentes de policía: según el gobierno, en los 9 primeros meses del año murieron 1.415 personas a manos de estos grupos. Cinco asesinatos diarios.

En octubre, Amnistía Internacional publicó un informe sobre la antigua Birmania, titulado «Myanmar sin ninguna ley». La minoría musulmana del estado de Rakhine, a cuyos miembros se conoce también por Rohingyas, fue objeto de un auténtico bombardeo de violaciones de derechos humanos, que en julio había provocado la huida de más de 260 mil personas a Bangla Desh. Los militares habían arrasado mezquitas y pueblos.

Hay indicios de que desde 1989 ha habido en Aceh, Indonesia, al menos 2 mil ejecuciones extrajudiciales, posible-



mente muchas más.

Unos 43 mil demandantes de asilo vietnamitas seguían detenidos a finales de año en Hong Kong.

En Filipinas, entre 1988 y 1992, el gobierno y fuerzas afines a éste han matado brutalmente a centenares de personas.

LA PENA CAPITAL

21 países del mundo han abolido la pena de muerte. A finales de año, el 44% de los países del mundo habían suprimido la pena capital en su legislación en la práctica. La aplicación a delitos excepcionales, como los cometidos en tiempo de guerra. En otros 20 países y territorios que retenían la pena de muerte en su legislación, no se habían producido ejecuciones desde hacía al menos 10 años.

En 1992 se tuvieron noticias de la ejecución de 1.708 presos en 35 países y se condenó a muerte a 2.697 personas en 62 países. En estas cifras se incluyen sólo los casos conocidos por Amnistía Internacional: el número real es, con toda seguridad, más elevado. Como en años anteriores, la mayoría de las ejecuciones registradas se llevaron a cabo en un número reducido de países.

GEOGRAFÍA DE LA VIDA

Desde 1970 en que Dawda Jawara se convirtió en presidente de Gambia sólo hay constancia de la imposición de una sentencia de muerte en ese país.

En Finlandia las únicas violaciones a derechos humanos que conoce Amnistía Internacional es que un objetor de conciencia fue encarcelado por negarse a cumplir el servicio militar. Tres objetores de conciencia fueron liberados tras cumplir sus sentencias. Los cuatro eran considerados presos de conciencia.

Son muy pocos los países que no aparecen con ninguna violación a los derechos humanos, así como Bélgica, Islandia, Suecia.

Para los países que sinceramente quieren prevenir las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, Amnistía Internacional sugiere el siguiente programa con 14 puntos: Condena oficial de las mismas. Responsabilidad de la cadena de mando. Restricción del uso de la fuerza. Acción contra los «escuadrones de la muerte». Protección contra las amenazas de muerte. Eliminación de las detenciones secretas, autorización de las aprehensiones y detenciones, información sobre detenciones y excarcelaciones. Acceso a las personas detenidas, mecanismos para localizar y proteger a los detenidos. Prohibición legal de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Responsabilidad individual. Investigación de los hechos. Enjuiciamiento a los culpables. Compensación y rehabilitación de las víctimas. Ratificación de los instrumentos de derechos humanos y aplicación de las normas internacionales. Responsabilidad internacional.

Me parece que el informe de las violaciones a los derechos humanos quedaría más completo si se incluyeran las cifras oficiales de los homicidios cometidos en cada país. La valoración de la vida humana parece muy diversa en unos países y en otros. Hay algunos en los que en diez años se cometen menos homicidios que en Caracas en un fin de semana. Y pienso que todo gobierno y todo pueblo tiene su responsabilidad en esa valoración.

Soy gran admirador de Amnistía Internacional. Pienso que su Informe anual tendría que ser el libro de texto de algunas facultades universitarias, en lugar de ponerse a estudiar el Alfarismo en Ecuador. ¿Qué sabemos si no sabemos defender la vida? Para los que quieran acercarse a este movimiento de defensa de la vida humana, el teléfono de Amnistía Internacional en Caracas es: 575.32.79. Anímese con ellos a defender la vida.